**REPÚBLICA DE COLOMBIA**

**RAMA JUDICIAL**

**

**JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ**

**SECCIÓN PRIMERA**

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veinte (2020)

**Acción:**  Tutela

**Expediente:** 11001 3334 003 2020 0006200

**Demandante:**  Nubia Gómez Echeverri.

**Demandado:** Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

**Asunto: FALLO TUTELA**

Procede el Despacho a resolver la solicitud de tutela presentada, por la señora Nubia Gómez Echeverri, mediante apoderada, en contra del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

1. **ANTECEDENTES**
   1. **Hechos**

La actora sustentó su solicitud en los siguientes:

Manifiesta que presentó petición el 7 de enero de 2020, ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el que solicita se le expida certificado cetil, del tiempo laborado, bajo el radicado No. 1-2020-000162 (fl.10).

Indica que ha pasado más de dos meses de la radicación y la entidad accionada no ha dado respuesta de fondo a la petición, por lo que considera se le está vulnerando el derecho de petición a su representada.

**1.2 Pretensiones**

*“Se tutele el derecho fundamental de petición y en consecuencia, se ordene al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dar respuesta de fondo y completa a la solicitud radicada el día 14 de enero de 2020 bajo el radicado No.* 1-2020-000162*”.*

**1.3 Derechos invocados como vulnerados.**

La accionante sostiene que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, vulneró el derecho de petición.

**1.4 Trámite procesal.**

Mediante acta individual de reparto, visible a folio 11 del expediente, correspondió a este Despacho, el conocimiento de la presente acción de tutela, la cual fue admitida por auto del 16 de marzo de 2020 (fl.13) providencia que fue notificada el 16 del mismo mes y año (fls.14-16).

En dicho proveído, se ordenó correr traslado por el término de 2 días, al Ministro de Comercio Industria y Turismo y al Director de Talento Humano de la misma entidad, para pronunciarse sobre los hechos expuestos por la accionante, así como para allegar y solicitar las pruebas que consideren pertinentes.

**1.5** **Contestación de la acción de tutela.**

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante escrito allegado por correo electrónico a este Despacho el día 17 de marzo de 2020, bajo el radicado No. OAJ-OFEX-086, manifiesta que revisada la carpeta de hoja de vida de la señora Gómez Echeverri, se verifico que el día 27 de enero de 2020, se dio contestación a la petición radicado bajo el No. 1-2020-000162 de fecha 7 de enero de 2020, y se expidió el certificado de tiempos laborados – CETIL, quedando a disposición de la entidad reconocedora de pensiones a la cual se encuentra afiliada la accionante.

Indica que el 29 de enero de 2020, mediante oficio No. 2-2020-001580, se remitió la respuesta a la solicitud presentada por la señora Nubia Gómez Echeverri, junto con el Certificado electrónico de tiempos laborados CETIL, No. 202001830115297000990052, a la dirección aportada por la apoderada de la accionante (Jeninifer Tatiana Monroy Bustos – TG Consultores Pensiones).

Aduce que dichos documentos fueron recibidos por la Empresa TG Consultores Pensiones, el día 12 de febrero de 2020, para lo cual aporta copia de la guía No. 8040669037, con sello de recibido.

Señala que teniendo en cuenta lo anterior, el Ministerio dio respuesta a la solicitud presentada por la accionante, a la dirección aportada en el escrito de petición y la misma fue recibida tal y como se evidencia con las documentales allegadas, por lo que solicita declarar la improcedencia de la presente acción por carencia actual de objeto por hecho superado.

**2. CONSIDERACIONES**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela se ejerce para reclamar de la jurisdicción, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando se vean amenazados o vulnerados por cualquier acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares mediante un procedimiento preferente y sumario.

**2.1 Problema jurídico a resolver**

¿Vulneró el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el derecho fundamental de petición, a la señora Nubia Gómez Echeverri, respecto de la petición elevada el 7 de enero de 2020, pese haber dado respuesta mediante oficio No. 2-2020-001580 el 29 de enero de 2020?

**2.2 Del derecho de petición.**

El artículo 23 de la Constitución Política, dispone:

*ARTÍCULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.*

En concordancia con lo anterior, los artículos 13 y 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificados por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, establecen que toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición y, por lo tanto, incluye el derecho a obtener una respuesta completa y de fondo.

Adicionalmente, la precitada normativa dispone que, de forma general, toda petición debe solucionarse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción, **salvo situaciones especiales; por ejemplo, cuando se trata de solicitudes relativas a documentos e información se dispondrá de diez (10) días** y cuando se trate de consultas dirigidas a una entidad sobre las materias a su cargo treinta (30) días.

Finalmente, el parágrafo único de referenciado artículo 14, prevé que en aquellos casos en que la autoridad no pueda resolver una solicitud en los plazos señalados, deberá informarlo al interesado y, de todas formas, atenderla dentro un plazo razonable, el cual no podrá exceder el doble del inicialmente previsto.

Ahora bien, respecto del derecho fundamental de petición, la Corte Constitucional en sentencia T–556 de 2013/[[1]](#footnote-1)/[[2]](#footnote-2), reiterando la jurisprudencia expuesta en sentencia SU–975 de 2008, concreta los parámetros que cubren el derecho de petición y los elementos que constituyen su núcleo esencial, en la mencionada providencia se señaló:

*“Dentro del marco citado, el derecho de petición se concreta* ***(i****) en la posibilidad que tiene cualquier persona de presentar peticiones ante las autoridades;* ***(ii)*** *en la obligación correlativa de las autoridades de emitir una respuesta pronta, clara, completa y de fondo a las solicitudes que le sean presentadas; y* ***(iii)*** *en la consecuente obligación de las autoridades de comunicar de manera oportuna a los peticionarios su respuesta. Igualmente debe anotarse que el derecho de petición guarda un vínculo de conexidad con otros derechos de igual relevancia como el derecho a la información y a la libertad de expresión.*

*4.2. La jurisprudencia constitucional ha establecido que el núcleo esencial del derecho fundamental de petición comprende los siguientes cuatro elementos:*

***(i)*** *la posibilidad cierta y efectiva de presentar, de manera respetuosa, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o tramitarlas;*

***(ii)*** *la facultad de obtener una resolución pronta y oportuna de la cuestión en los términos consagrados en la ley;*

***(iii)*** *el derecho a que sea resuelta de fondo, de manera clara, precisa y congruente con lo solicitado, y*

***(iv)*** *la pronta comunicación al peticionario acerca de la decisión o información requerida.”*

De igual forma, la jurisprudencia constitucional[[3]](#footnote-3) ha sido reiterativa en señalar que para que el derecho de petición sea efectivamente respondido, la respuesta al mismo ha de ser:

**Suficiente:** Cuando quiera que resuelva materialmente la petición y satisfaga los requerimientos del solicitante, sin que por ello excluya la posibilidad de que la respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario.

**Efectiva:** Si soluciona el caso que se plantea.

**Congruente:** Si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, lo que supone que la solución o respuesta verse sobre lo preguntado y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición, sin que se excluya la posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre relacionada con la petición propuesta.

De esta manera, solo se entenderá que el derecho de petición se encuentra garantizado cuando la respuesta al requerimiento hecho por el particular cumple con los anteriores aspectos.

En este mismo sentido, el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015[[4]](#footnote-4) dispone:

***“Artículo***[***14***](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html#14)*. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:*

*1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.*

*2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.*

***PARÁGRAFO.****Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.”*

De acuerdo con los antecedentes legales y jurisprudenciales relacionados en precedencia, por regla general el término para resolver la petición es de 15 días hábiles, y 10 días hábiles cuando se refiera a peticiones de documentos y de información.

**2.3 Del caso concreto**

La señora Nubia Gómez Echeverri, acude a este mecanismo constitucional, a efectos que le sea amparado el derecho fundamental de petición, presuntamente transgredido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pues en su criterio, esta autoridad no ha dado respuesta a la petición formulada el 7 de enero de 2020.

Procede el Despacho a determinar si en el presente asunto, el actuar de la autoridad accionada vulneró el derecho fundamental de petición, de la accionante para cuyo propósito, se estudiarán las pruebas allegadas al plenario.

Se encuentra probado dentro del proceso los siguientes hechos:

* El 7 de enero de 2020, la señora Nubia Gómez Echeverri, a través de apoderada, presentó petición ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en la que solicitó se le expidiera certificado cetil, con la información laboral del tiempo laborado en la entidad. (fl. 10).
* La entidad accionada con la contestación de la tutela, aporto copia del oficio No. 2-2020-001580, del 29 de enero de 2020, con el cual emitió respuesta al derecho de petición, dirigida a la señora Jennifer Tatiana Monroy Bustos (apoderada de la accionante), al igual que aporta copia del certificado de tiempos laborados, formato CETIL y la guía No.8040669037, con la cual remitió dicha información a la dirección aportada por la accionante en el escrito de petición.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el oficio con radicado No. 2-2020-001580 del 29 de enero de 2020, le indica a la apoderada de la tutelante, que en atención a la solicitud presentada con radicado No. 1-2020-000162, remite la certificación de tiempos laborados en el formato Cetil solicitado, informándole además que el mismo se encuentra a disposición en el sistema, para que la administradora de pensiones a la cual se encuentra afiliada la señora Nubia Gómez Echeverri, pueda verla en cualquier momento.

La anterior respuesta conforme la guía de trazabilidad y certificado de entrega visible a en el expediente, se entregó en la dirección suministrada por la peticionaria en su solicitud esto es en la Calle 119 No. 11A-28 de Bogotá y recibida el 12 de febrero de 2020, con sello de la empresa TG Consultores Pensiones.

Conforme a lo anterior, concluye el Despacho que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través del oficio antes citado, dio una repuesta de fondo y concreta a lo solicitado por la actora, en cuanto le expidió el certificado de tiempos laborados – Cetil y de igual manera le informo que el mismo se encontraba a disposición en el sistema, para que la administradora de pensiones a la cual se encuentra afiliada la señora Nubia Gómez Echeverri, pudiera verla en cualquier momento.

Teniendo en cuenta lo anterior y en relación a los elementos esenciales que hacen parte del derecho fundamental de petición, encuentra el Despacho que estos fueron respetados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por cuanto la señora Nubia Gómez Echeverri; i) presentó una petición; ii) obtuvo una pronta decisión de la misma, mediante un pronunciamiento preciso, claro y congruente respecto de lo pretendido; y iii) lo contestado le fue debidamente enviado y entregado en la dirección aportada por la accionante.

En virtud de lo anterior, resulta claro que el el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, previo a la interposición de la presente acción constitucional, contesto de fondo la petición elevada por la tutelante y le comunico la respectiva respuesta en la dirección que fuera suministrada para tal efecto, con lo que se demuestra que no se presentó una vulneración al derecho fundamental de petición, pues la accionante recibió la información por esta requerida de manera amplia y detallada, por ende, mal podría predicarse vulneración a los derechos reclamados, en consecuencia, teniendo en cuenta que la respuesta y notificación de la misma se realizó de manera previa a la radicación del presente medio constitucional, se procederá a negar el amparo de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

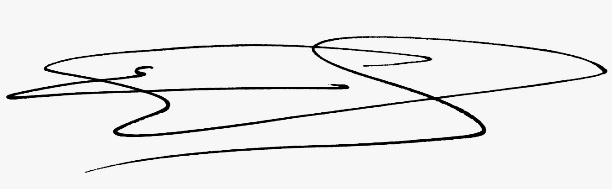
**FALLA**

**PRIMERO. NEGAR,** el amparo al derecho fundamental de petición de la señora Nubia Gómez Echeverri, identificada con cédula de ciudadanía 51.568.415 de Bogotá de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO.** Notifíquesela presente decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz, conforme lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

**TERCERO.** Si no fuere impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,**

****

**ERICSON SUESCUN LEÓN**

**JUEZ**

L.R

1. Sentencia C-818 de 2011, M. P., dr, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub [↑](#footnote-ref-1)
2. Sentencia C.951 de 2014, M. P., dra. Martha Victoria Sáchica Méndez. [↑](#footnote-ref-2)
3. Sentencia T-556 de 2013. [↑](#footnote-ref-3)
4. Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. [↑](#footnote-ref-4)